



RECURSO DE REVISIÓN CIVIL
R.C. 214/2022.

QUEJOSOS Y RECURRENTES: *****

***** ***** **** *****

***** ***** * ***** *****

***** *****

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS
MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI.

Revisó engrose:

Lic. AMM

SECRETARIO: ALBERTO MENDOZA
MACÍAS.

Ciudad de México, acuerdo del Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
correspondiente a la sesión celebrada el **veinticinco de
noviembre de dos mil veintidós.**

V I S T O S, los autos del toca **R.C. 214/2022**
para resolver el recurso de revisión interpuesto por *****

***** ***** **** ***** ***** ***** *

***** ***** ***** ****, todos por derecho propio,

contra la **sentencia de trece de mayo de dos mil
veintidós**, dictada por el Juez Décimo de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo
indirecto *****; y,

Alberto Mendoza Macías
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.24
18/01/24 14:58:45

PRIMERO. Mediante escrito presentado el
de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de
ndencia Común de los Juzgados de Distrito en
ivil en la Ciudad de México, *****

***** , todos por derecho propio, solicitaron el

amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Segunda Sala de lo Familiar y del Juez Quinto Familiar de Proceso Oral, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; que estimaron violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales y que hicieron consistir en lo siguiente:

“[...] **IV. ACTO RECLAMADO:** - - - Lo constituye la Sentencia de fecha 31 de enero de 2022, dictada en la (sic) toca de apelación número ***** , publicada el pasado 1 de febrero de 2022 mediante boletín judicial y surtió efectos el día 3 de febrero de 2022, misma que confirmó el auto de fecha 3 de noviembre de 2021, dictado por el Juez



Quinto Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.” (Foja 6 del juicio de amparo indirecto).

SEGUNDO. La demanda de amparo antes referida fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, cuyo titular, la admitió a trámite por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós; asimismo, fijó fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y no reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna (fojas 37 a 40 del juicio de amparo indirecto en estudio).

TERCERO. Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dictó sentencia el **trece de mayo de dos mil veintidós**, al tenor del siguiente punto resolutivo:

“[...] **ÚNICO.** Se *niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos* *****

,

Oral, an
ciudad,
undo,
unto con
juicio d

ne con

****, tod
recurso

***, todo
recurso
y uno d

***, todo
recurso
y uno d

esponde
teria C
ado con
en Ma
tanci

Monocim
ria Civil

del índice de un juzgado de distrito en materia civil perteneciente a este circuito.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, dado que la sentencia impugnada fue notificada por lista a los quejosos –ahora recurrentes– el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente; por lo que el plazo transcurrió del **dieciocho al treinta y uno de mayo del año en curso**. Ello, pues a dicho cómputo deben descontarse los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo todos de la referida anualidad, al haber sido sábados y domingos, por tanto inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en tanto que, el recurso de revisión se presentó el **treinta y uno de mayo de dos mil veintidós**, es decir, el último día del plazo legal.

TERCERO. Colmados los aspectos formales en el presente asunto, se procede a su estudio, para lo cual el



magistrado relator entrega a los integrantes de este órgano jurisdiccional, adjunto al proyecto respectivo, copia del recurso de revisión, así como de la sentencia recurrida; agregándose copia certificada de esta última a los autos del expediente en que se actúa.

CUARTO. Los agravios de la recurrente son los que obran de la foja cuatro a veintiuno del cuaderno del recurso de revisión en que se actúa.

QUINTO. Los agravios devienen **infundados** en una parte e **inatendibles** en otra, los cuales se atenderán acorde a la causa de pedir.

Previo a su análisis es necesario relatar algunos de los antecedentes que derivan del expediente de jurisdicción voluntaria *********, del índice del Juzgado

Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, mismos que tienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales a continuación se indican:

jurisdicción voluntaria, la solicitud de que el juez tuviera conocimiento paso a paso del estado que guardaba la gestación, y luego que se verificará el alumbramiento, se ordenará al Juez del Registro Civil de la Ciudad de México, levantar el acta de nacimiento correspondiente con los nombres de ***** ***** ***** * ***** *****

naciera, en virtud de manifestar su voluntad procreacional.
Ello, a fin de garantizar el derecho a la identidad del menor.

Lo anterior, con base en que los recurrentes indicaron que el 12 (doce) de julio de 2021 (dos mil veintiuno),

suscribieron con ***** , como

gestante sustituta, un contrato de maternidad sustituta;
documento cuyas firmas fueron ratificadas ante el Notario
188 de la Ciudad de México en esa misma fecha, como



consta en el acta ***** que al efecto exhibieron. En dicho contrato, las partes esencialmente convinieron lo que a continuación se destaca:

- En la cláusula primera, que su objeto era llevar a cabo dentro de los siguientes 90 (noventa) días, la implantación de los embriones obtenidos previamente mediante fertilización *in vitro* como producto de las células germinales de los padres contratantes, en el útero de la mujer gestante sustituta, para que ella llevara el embarazo a término.
- En la cláusula segunda se estableció que una vez llegado el momento del parto, los padres contratantes recibirían a su hijo, que le sería entregado inmediatamente por la mujer gestante, quien firmaría cualquier documento necesario para dar debido cumplimiento al contrato. Además, que la mujer gestante sustituta otorgaba en ese acto su autorización para que al momento del parto se

extendiera a favor de los padres contratantes el certificado de alumbramiento, mismo que debería acompañarse al contrato ante el Oficial del Registro Civil correspondiente para la expedición del acta de nacimiento del menor, en el que constara la filiación en favor de los padres contratantes.

- En la cláusula tercera se establecieron las obligaciones de la gestante sustituta, relacionados con la realización de exámenes médicos y psicológicos, la transferencia embrionaria, los cuidados, el periodo de abstinencia, la supervisión y la información.
- En la cláusula cuarta se establecieron las obligaciones de los padres contratantes relacionadas con cubrir los gastos de la realización del procedimiento de fertilización *in vitro*, de la transferencia embrionaria e implantación del producto, de los tratamientos y honorarios médicos, estudios de laboratorios, medicamentos y hospitalización, así como los gastos de viáticos y



traslados necesarios para el cumplimiento del contrato y los gastos de manutención y alimentación de la gestante. Precizando expresamente que ninguna de las cantidades señaladas implicaban contraprestación económica en favor de la mujer gestante por lo que el contrato era de naturaleza gratuita.

2. A dicha solicitud de jurisdicción voluntaria, recayó el auto de 3 (tres) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), dictado por el Juez Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, el cual determinó desecharla, esencialmente por las siguientes consideraciones:

- La declaración de presunción de filiación que pretendían los promoventes no se adecuaba a ningún supuesto normativo previsto por la legislación civil vigente, ya que el pretendido hijo o hija se encontraba gestando y no había nacido [a esa fecha], siendo que de acuerdo al artículo 337 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora

Ciudad de México) la interposición de alguna demanda sobre el reclamo de reconocimiento de paternidad o maternidad acontece cuando el producto ha sido desprendido del seno materno vivo 24 (veinticuatro) horas o haya sido presentado vivo ante el juez del Registro Civil, situación que no había acontecido en el caso ya que el alumbramiento era incierto y el juzgador no podía realizar pronunciamiento con relación a la maternidad subrogada (sic), o en su caso, las consecuencias de derecho que deriven de la misma, por lo que el juzgador se encontraba impedido para pronunciarse sobre actos jurídicos de realización incierta como lo era el reconocimiento de la filiación de un producto que no había nacido.

- La filiación no podía ser materia de convenio ni de transacción entre las partes, conforme el artículo 338 del Código Civil.



- De ahí que el juzgador no contara con competencia, al no contemplarse la gestación por sustitución.
- El juzgador se encontraba impedido para pronunciarse y sancionar el contrato celebrado entre los promoventes, tomando en consideración que no era su facultad resolver sobre los elementos de validez y existencia del contrato y menos aún sobre su cumplimiento, aunado a que el objeto del contrato [no] se encontraba regulado en la Ciudad de México (sic) y por tanto no resultaba posible ni lícito y era contrario a derecho, sin que pudieran pactarse actos contrarios a la moral, al derecho y a las buenas costumbres.
- Era dable hacer notar que si bien la maternidad subrogada era un derecho, también era cierto que no era derecho convertirla en una actividad comercial, puesto que estaba de por medio la dignidad humana y aun cuando existía un reconocimiento a la autonomía para ejercer la reproducción, no se podía contratar sobre la

gestación o la entrega del producto, pues no eran simples objetos que se pudieran renunciar por un simple contrato.

- El artículo 6° del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) dispone que la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la ley ni el tenerla ni modificarla, ya que sólo pueden renunciarse derechos privados que no afecten el interés público y siempre y cuando la renuncia no afecte derechos de terceros. Sin que pudiera pasarse por alto que el ejercicio de los derechos de los promoventes no implicaba que pudieran hacer lo que sea, pues siempre debe existir una regulación, es decir, un actuar dentro del marco legal, lo que en la especie no se actualizaba pues no existe en esta ciudad una legislación que prevea lo referente a los requisitos que deben satisfacer los contratantes que especifique la naturaleza, los elementos y las características del acto jurídico que de celebrarse según las distintas modalidades de la maternidad sustituta, incluso que



sea capaz de garantizar los derechos tanto del niño o niña, la madre gestante y los contratantes, todo ello derivado de la suscripción del contrato de gestación por sustitución.

- Al no encontrarse regulada legalmente la figura de la maternidad por sustitución en esta ciudad, se atentaba contra el interés superior del menor y el interés público en las relaciones de familia, ya que la maternidad subrogada, como lo pretendían los solicitantes, contradice normas y disposiciones relacionadas con la nacionalidad, dignidad humana, adopción, patria potestad, tutela, protección de la mujer y de los niños y el tráfico de personas, aparte de que no existe normatividad alguna que provea cuándo se justificaría el aborto a pedido de los padres genéticos o, de presentarse casos de niños cuando con alguna enfermedad grave o malformación física o mental, tampoco se encontraba regulado qué procedería en caso de nacimiento múltiple, o en caso de que hubiera complicaciones del parto, como determinar si se

debe salvar la vida de la gestante o la del bebé; tampoco se encontraba regulado qué procedería en caso de fallecimiento de la gestante a consecuencia del embarazo o mala práctica de los médicos.

- Aspectos que los promoventes habían pactado en el contrato del cual solicitaban un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, sin que válidamente el juzgador pudiera regular o pronunciarse sobre dicha figura jurídica como lo pretendían los promoventes, en virtud de que dentro de las facultades de su autoridad y en general del Poder Judicial de la Ciudad de México, no se encontraba la de legislar, de conformidad con el artículo 28 constitucional.
- No obstante, se debía indicar que la anterior determinación no hacía nugatorio el derecho humano de ***** al libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho de fundar una familia consagrado en el artículo 4° constitucional;



ni tampoco el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho que debe gozar cualquier justiciable, de conformidad con los artículos 1° y 17 constitucionales, que prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

3. Inconformes con lo anterior, los recurrentes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto el 31 (treinta y uno) de enero de 2022 (dos mil veintidós), por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro de los autos del toca ***** , en el cual sustancialmente, determinó lo siguiente:

- Los conceptos de inconformidad eran parcialmente fundados pero insuficientes para revocar el proveído combatido.
- Les asistía razón a los recurrentes en lo relativo a que las técnicas de reproducción asistida no se encontraban reguladas, sin embargo que constituyen un campo de normatividad en la que es

necesaria la intervención de la autoridad y que si bien los jueces no se encuentran facultados para legislar, sí se encuentran constreñidos a garantizar, promover, proteger y respetar los derechos humanos.

- Expuso diversas consideraciones en torno a la reproducción asistida y el parentesco.
- Los recurrentes no estaban solicitando que el juzgador se pronunciara sobre la validez del contrato, pues el mismo cumplía con los requisitos de existencia y validez, tan es así que había sido ratificado ante Notario 188 de esta Ciudad y atendiendo a su contenido no era dable afirmar que se tratara de un convenio oneroso; no obstante, lo pretendido por los impugnantes en cuanto a que el juez tuviera conocimiento paso a paso del estado que guardaba la gestación, dicha circunstancia iba en contra de la naturaleza jurídica de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues las mismas eran un procedimiento de mera constatación o



demostración de hechos, es decir, donde no existe controversia alguna, siendo que lo solicitado por los inconformes era la intervención de la autoridad judicial para normar un aspecto que se adecuara a sus intereses, como lo es que el órgano jurisdiccional diera seguimiento al contrato que celebraron los promoventes sin que fuera necesaria su intervención, pues como los mismos recurrentes manifestaron, existía un contrato que vinculaba a las partes y a él deberían estarse, siendo que, en caso de que alguno de los involucrados no cumpliera con sus obligaciones, el resto tendría expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma correspondientes.

- Respecto a que su pretensión no versaba sobre la presunción de filiación, sino demostrarla y probarla, para que luego de que se verificara el alumbramiento, se ordenara al Juez del Registro Civil en la Ciudad de México levantara el acta de nacimiento correspondiente donde aparecieran

***** ***** ***** * ***** ***** *****

Alberto Mendoza Macías
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.24
18/01/24 14:58:45

***** , sin que se trate de un hecho de

realización incierta porque ***** ***** *****

*** ya se encontraba embarazada; debía decirse que no pasaban inadvertidos los problemas respecto al levantamiento de actas de nacimiento de infantes nacidos a través de técnicas de reproducción asistida, sin embargo como lo había sostenido el juez del conocimiento, era improcedente la admisión del trámite, considerando que el acto que pretendían efectuar, es decir la expedición del acta de nacimiento, dependía de que jurídicamente hablando, el menor llegara a ser reconocido como persona, lo cual sucedía cuando se hubiere desprendido del seno materno 24 (veinticuatro) horas o fuera representado vivo al juez del Registro Civil.

- Como resultado de lo anterior, se trataba de un hecho de realización incierta y si bien el artículo 22 del Código sustantivo apunta que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido,



ello es únicamente para los efectos expresados en la misma legislación, como lo es que puede ser donatario o heredero y siempre que se encuentre sujeto a la condición de que nazca vivo y viable, de ahí que fuera infundado su agravio.

- Contrario a lo esgrimido por los impugnantes, no se había violentado el derecho a la identidad.
- Sin perjuicio de lo anterior las partes tenían a salvo sus derechos para hacerlos valer en la forma correspondiente una vez que naciera el producto de gestación.
- En cuanto a que el juez desatendió el derecho a la familia, tutela judicial efectiva y el libre desarrollo de la personalidad, el mismo resultaba infundado; en virtud de que a las partes no se les había negado o vulnerado el ejercicio de estos derechos, tan es así que se sometieron por voluntad al contrato de maternidad sustituta, por lo que no se apreciaba

que el juez hubiere infraccionado dichos derechos o haya dejado sin medios de defensa los impetrantes.

- En cuanto a que el juez era competente, tenía que precisarse que si bien los jueces de oralidad son competentes para conocer las jurisdicciones voluntarias y acciones derivadas de filiación, como se había precisado, dadas las circunstancias, la intervención judicial solicitada era improcedente.

4. La anterior determinación fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo que ahora se revisa, y respecto del cual, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México determinó negar el amparo a los ahora recurrentes, por los motivos que esencialmente a continuación se indican:

- Los argumentos que expusieron los peticionarios del amparo, resultan **infundados**.
- En la jurisdicción voluntaria se llevan a cabo actos que por disposición de ley o a solicitud de los



interesados, requieren la intervención del juez, cuando no exista controversia alguna entre las partes, es decir, que no haya litigio alguno, entendido éste como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro.

- Las resoluciones o actos emitidos en estos asuntos son, por regla general, del interés exclusivo del promovente y, por ende, no vinculan ni generan perjuicio o beneficio a nadie más en su acervo jurídico; en estos casos, el procedimiento debe desarrollarse conforme a las reglas generales previstas en el ordenamiento citado.
- Esto es, la jurisdicción voluntaria presupone la inexistencia de contención, por lo que, para su realización sólo basta la petición de parte legítima, y lo pedido se lleva a cabo en su exclusivo interés, sin afectar vinculatoriamente a nadie más, y por esto sólo se llama al Ministerio Público en los casos

especialmente señalados que puedan estar relacionados con el interés de la sociedad.

- La ley no desconoce que los actos realizados en jurisdicción voluntaria puedan dar pauta o servir de base para el inicio de una controversia en una vía propiamente jurisdiccional, y por eso, el artículo 896 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México deja abierta la posibilidad de que un tercero cualquiera con interés jurídico, presente oposición, mediante la exposición de sus pretensiones y causa de pedir, que demuestren la existencia de un litigio entre el promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria y el o los opositores.
- Cuando la oposición se presenta con las características mencionadas, la legislación atiende al principio de economía procesal, por lo cual interrumpe el procedimiento administrativo, que ya no está en condiciones de cumplir su función jurídica, por estar demostrado que el punto o tema

es objeto de un litigio entre dos o más personas, y por eso lo encausa a la vía contenciosa, a fin de que se resuelva con una sentencia ejecutoriada que vincule obligatoriamente a los contendientes con efectos de cosa juzgada.

➤ Preciso lo señalado por la Sala responsable en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca *****.

➤ Conforme a la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, no es posible considerar, como lo pretendían los quejosos, que la Sala debiera modificar su resolución para que estimara procedente la intervención del Juez para los efectos que indicaron.

➤ A través de las diligencias de jurisdicción voluntaria los quejosos pretendían documentar el contenido del contrato de maternidad sustituta, allegando constancias que justificaran la transferencia e implantación embrionaria, el estado del embarazo,

los exámenes médicos, los pagos cubiertos por gastos de análisis, atención médica, medicamentos y gastos hospitalarios; lo anterior, para que una vez que aconteciera el alumbramiento, se ordenara al Juez del Registro Civil de esta ciudad levantar el acta de nacimiento a nombre de los padres contratantes.

- Así, en esencia, el objetivo de los solicitantes de amparo es que la Sala modificara la resolución del Juez de lo Familiar, para que éste diera seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del contrato de maternidad que celebraron y reconociera un derecho de filiación a favor de los padres contratantes, girándose oficio al Juez del Registro Civil para que expidiera el acta de nacimiento del recién nacido en el momento correspondiente.
- De esta manera, aun y cuando en las diligencias de jurisdicción voluntaria se prevea que en caso de que alguna de las partes formule oposición se

deberán dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda, a través de dicha vía no era posible se acuerde lo planteado.

- La razón es que, a través del procedimiento instado el juzgador no puede verificar el cumplimiento del contrato de maternidad sustituta, porque dichas diligencias sólo tienen como finalidad patentizar actos y hechos ya realizados o por realizarse, pero no tienen el alcance de sólo dar fe de las cuestiones ante él planteadas, ni tampoco verificar o constatar el cumplimiento de un contrato celebrado entre particulares, ya que sólo el incumplimiento o la diferencia presentada en su interpretación requiere de la función jurisdiccional.

- Por lo que al no ser las diligencias el medio idóneo para que se dé fe o se verifique el cumplimiento de un contrato, no presupone intervención judicial alguna, porque con ello la labor del Juez se reduciría a la de un mero fedatario, con detrimento

de su función jurisdiccional, ya que la legislación no prevé dentro de las atribuciones que confiere a los juzgadores que sean éstos quienes verifiquen o constaten el cumplimiento de un contrato celebrado entre particulares, porque la lógica de los contratos es que sólo ante su incumplimiento o alguna diferencia relacionada con ellos, se pueda acudir a los tribunales para resolver las diferencias que surjan entre las partes, de ahí que la jurisdicción voluntaria no sea el procedimiento eficaz para verificar el cumplimiento de los contratos.

- Además, para constatar el cumplimiento del contrato, los recurrentes podían acudir ante un Notario Público para que diera fe de esos hechos, pues dicho funcionario cuenta con facultades que la propia ley le confiere para legitimar, legalizar y autenticar los actos y contratos donde intervenga, para dotarlos de la forma legal necesaria a fin de que tengan eficacia plena en el mundo del derecho.



➤ En otro aspecto, **tampoco era la vía adecuada para que en su momento se ordene inscribir el nacimiento del infante en el Registro Civil, porque las diligencias promovidas no pueden surtir efectos contra terceros, ni tampoco reconocer derechos o imponer prestaciones a los contratantes, por lo que el juez primigenio no está facultado para ordenar la expedición del acta de nacimiento peticionada y, además implicaría imponer una obligación al encargado del Registro Civil sin que hubiera sido llamado a una contienda judicial, rompiendo con ello la naturaleza jurídica de las diligencias de jurisdicción voluntaria en la que no existe controversia.**

➤ Para ello, **los quejosos tenían expedito su derecho para acudir ante el Juez del Registro Civil a solicitar la expedición del acta de nacimiento, y en el caso de que se negara la misma, tenían la facultad de hacer valer los medios de defensa que estimen pertinentes para impugnarlo.**

- De igual forma, respecto al ámbito familiar los quejosos destacaron aspectos del derecho de familia, tales como la filiación, su atribución a determinado tipo de progenitores, voluntad para concebir y maternidad subrogada, respecto de lo cual, deben ser motivo de verificación tres aspectos esenciales: 1. La persona que como madre gestante participa en el contrato debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio. 2. La voluntad libre de vicios de la gestante. 3. En ciertos casos, la existencia de la voluntad procreacional o voluntad de concebir un hijo.
- Todos estos son temas propios del derecho familiar, que si bien pueden dar lugar o no a un conflicto de partes en el que incluso deban analizarse los requisitos atinentes a la intervención de la gestante subrogada en el contrato de maternidad subrogada en el ámbito familiar y bajo las reglas del derecho procesal familiar, debe considerarse que tales aspectos deben ser dilucidados ante un juez

familiar de primera instancia, pero no en la vía ni por los motivos que habían propuesto los quejosos.

- Más si se toma en consideración que, la resolución que confirma la diversa que desecha la jurisdicción voluntaria, no le impide al infante cuando nazca gozar de su derecho a la identidad, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos nacidos mediante maternidad subrogada, no debe tenerse como un impedimento para que el Juez del Registro Civil se pronuncie al respecto, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad de los menores de edad y la necesidad de atender a su interés superior.
- En ese sentido, ante la realidad fáctica de un infante nacido bajo esta técnica, su derecho a la

identidad y la protección a su interés superior exigen que determine la filiación que le corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de la filiación, como los alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo.

- Por lo que, si entre las reglas aplicables en materia de filiación y registro de nacimiento hay algunas que permitan atribuir la filiación, como lo serían la presunción de paternidad o el reconocimiento de hijos, debe tenerse presente que la demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable para establecer la filiación sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, en las que opera al respecto la voluntad para concebirlo o voluntad procreacional y en el caso de la maternidad subrogada, es necesaria también la concurrencia de la voluntad libre de vicios de la madre gestante,



y sobre la base de que dicha mujer debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio.

- De esta forma, llegado el momento del nacimiento del menor, **no sería necesaria la exhibición de una sentencia ejecutoria que le autorice al Juez del Registro Civil de esta ciudad a realizar el registro del menor con la filiación de los padres contratantes, pues este tiene la obligación de establecerla, siempre y cuando se exhiban las constancias pertinentes que permitan demostrar que fue engendrado por medio de la técnica de reproducción asistida, denominada de maternidad subrogada.**
- Por otra parte, **no se advierte una afectación al libre desarrollo de la personalidad de los quejosos, pues en ningún momento la Sala responsable se pronunció respecto a la manera en la que quieren conformar una familia, o algún impedimento legal, social o moral, sino que solamente se ocupó de analizar que no era posible**

gestación
ción del

- puesto,
 da dic
 encontr
 al argum
 entar y
 nidad s
 urídica
 n el artí
 Civiles
 mplicara



jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas.

- Los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refieren que toda persona debe de ser oída con las debidas garantías, sin embargo, ello no es obstáculo para que se respeten los procedimientos establecidos en la legislación común, **como acontecía en el caso, en el que se había constatado que la vía planteada por los quejosos no es la idónea para los fines que persiguen.**
- De forma que a nada práctico conduciría dar trámite a la solicitud, si tales medios no pueden surtir efectos contra terceros, **ni con ello podría girarse oficio al Registro Civil para que expida acta de nacimiento con el nombre de los padres contratantes.**

Como puede apreciarse de lo anterior, si bien, una de las pretensiones de las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovieron los quejosos, y que dio lugar a las resoluciones de primera y segunda instancia, así como a la sentencia que ahora se revisa, era que a través de esa vía **se hiciera constar paso a paso el proceso de gestación de** ***** *****, lo cierto es que los agravios expuestos en el presente recurso sólo pueden ser tendientes a combatir que no procede la jurisdicción voluntaria, pero en este momento, **sólo para que el juez ordene al Registro Civil levantar el acta de nacimiento del menor**; tomando en cuenta que el menor nació el ***** ** ***** ** *** ** ***** (fecha posterior a la sentencia recurrida), como se indicó en el escrito de agravios del presente recurso y como consta en el Certificado de Nacimiento, expedido por la Secretaría de Salud, cuya copia certificada acompañaron los recurrentes y que obra a foja 25 del presente expediente.

Precisado lo anterior se analizarán los motivos de agravio.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sostienen los recurrentes que el juez de distrito refiere que *“tampoco es la vía adecuada para que en su momento se ordene inscribir el nacimiento del infante en el Registro Civil, porque las diligencias promovidas no pueden surtir efectos contra tercero”*, lo cual es incorrecto toda vez que el contrato de maternidad sustituta tiene efectos sólo entre las partes. El oficio que solicitan girar al Registro Civil, para que ordene inscribir el nacimiento del menor YA NACIDO, no es una resolución que “surta efectos contra terceros” pues sólo la debe cumplir justamente el destinatario, siendo éste el propio Registro Civil, para que se levante el acta con los datos de los padres biológicos ***** y ****
***** , a pesar de que el certificado de nacimiento tenga como “madre” a la gestante. No hay ningún otro destinatario, interesado, afectado que deba cumplir dicho oficio u orden judicial por lo que no existe un efecto general contra terceros.

Estiman que usando el mismo criterio del juzgador de distrito, se llegaría a la conclusión de que,

tampoco se podría ordenar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento en un procedimiento de jurisdicción voluntaria de adopción, porque entonces, el juez familiar no está facultado para ordenar la expedición del acta de nacimiento peticionada ya que implicaría imponer una obligación al encargado del Registro Civil sin que hubiera sido llamado al procedimiento, pues como se sabe, en dichos procedimientos, no se le llama a dicha autoridad, sino que después de dictada la sentencia, se da la orden al Registro Civil de levantar una nueva acta de nacimiento en favor de la persona adoptada. De ahí, lo incongruente e incorrecto del razonamiento del Juez de Distrito.

Precisan que el acta de nacimiento es el documento que, en todo caso, sí tiene efectos erga omnes, y no porque así lo pueda indicar la autoridad responsable en una resolución, sino porque así lo dispone el artículo 121 constitucional.

Registro Civil, ha sostenido el argumento de que, para expedir el acta de nacimiento de los menores que son concebidos a través de la maternidad subrogada, es necesario acudir con sentencia ejecutoriada que ordene el registro de nacimiento correspondiente. Es decir, hizo caso omiso de dicha situación.

Aducen que por ello, al no existir controversia alguna entre los promoventes de las diligencias, pero sí requieren la intervención judicial para que se ordene el registro del menor producto de la gestación a nombre de los padres procreacionales, es la jurisdicción voluntaria el único procedimiento para obtener el pleno reconocimiento y ejercicio del derecho de *****

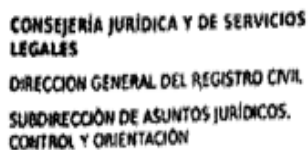
***** a la familia, a la libre procreación y a usar técnicas de reproducción asistida como lo es la gestación sustituta.

Invocan la tesis “**JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.**
CONFORME A LOS NUMERALES 94 Y 878 DEL CÓDIGO



Apuntan que el juez de distrito señaló que respecto a que *"a través del procedimiento instado el juzgado no pude verificar el cumplimiento del contrato de maternidad sustituta dicha vía no es posible se acuerde lo planteado"*; afirmación que también resulta incorrecta, porque de ser así se estaría dejando en total estado de indefensión a los promoventes de las diligencias, ya que se estaría en contra del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis con el rubro ***"FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA."***

Manifiestan que el Registro Civil requiere indispensablemente una resolución de autoridad judicial (JUEZ FAMILIAR) que ordene el Registro del menor nacido bajo la técnica de reproducción asistida, a fin de adecuar la realidad fáctica a la realidad jurídica, tal y como se advierte del oficio de fecha 8 (ocho) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), signado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación en la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, mismo que fue obtenido de diverso procedimiento de la misma naturaleza en el cual se advierte que es REQUISITO para la expedición del acta de nacimiento lo siguiente: I. Certificado de nacimiento; II. Constancia de inexistencia de registro de nacimiento; III. Copia certificada del acta de matrimonio; IV. Identificación original vigente; V. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y, VI. SENTENCIA EJECUTORIADA QUE ORDENE EL REGISTRO DE NACIMIENTO CORRESPONDIENTE. Además, insertan para mayor ilustración el referido oficio:



**MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA**

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021.

DGRC/SAJCO/ 1/2021.

PRÉSENTE

Me refiero al escrito que presentó ante esta Dirección General el 5 de noviembre de 2021, mediante el cual solicitaron sustancialmente lo siguiente:

"...solicitamos se expida el ACTA DE NACIMIENTO de nuestro menor hijo ...". (Sic)

Al respecto, con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 237 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le informo que para que esta Dirección General proceda a realizar el registro de nacimiento, deberán solicitar una cita en el Juzgado Central, al correo electrónico: lg.dorc.cdmx@gmail.com.

Asimismo, el día de la cita deben comparecer con la siguiente documentación:

1. Certificado de nacimiento emitido por la institución donde ocurrió el nacimiento.

El certificado de nacimiento deberá presentarse en el formato que al efecto expida la Secretaría de Salud de conformidad con la normatividad aplicable debidamente llenado. Cuando no exista el certificado o la constancia antes señalada, o por causas de fuerza mayor no se tuvieran, el declarante deberá presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos realizada ante la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de documentos y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente.

2. Constancia de inexistencia de registro de nacimiento, cuando éste haya ocurrido dentro del perímetro de la Ciudad de México, deberá ser expedida por la Oficina Central o caja ventanilla de la institución, que comprenda un año anterior a la fecha de nacimiento y hasta la fecha de su expedición. Misma que tendrá una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedición.

Quando el nacimiento haya ocurrido fuera de la Ciudad de México, además se deberá presentar Constancia de Inexistencia de registro de nacimiento expedida por el juzgado u

Arco de Belén, sin número, Esquina con Dr.
Andrade Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

oficialía del registro civil más cercano a donde ocurrió el alumbramiento, que deberá comprender un año anterior y dos posteriores a la fecha de nacimiento. Misma que tendrá una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedición.

3. Copia certificada del acta de matrimonio o de las actas de nacimiento de las personas progenitoras. En caso de que alguno de los progenitores o ambos sean extranjeros deberán presentar acta de matrimonio o de nacimiento apostillada o legalizada y, en caso de estar a otro idioma, traducida por una persona perita autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
4. Identificación oficial vigente (original y fotocopia).
5. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (original y fotocopia)
6. Sentencia ejecutoriada que ordene el registro de nacimiento correspondiente, misma que deberá ingresar previamente al área de Inscripción de Ejecutorias y Análisis Jurídico de esta Dirección General.

Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CRYSTEL GUADALUPE ARELLANO MORENO
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, CONTROL Y ORIENTACIÓN.

0096



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Citan la tesis “**JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.**

CONFORME A LOS NUMERALES 94 Y 878 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA PREPARAR UN JUICIO EJECUTIVO CIVIL, EN ATENCIÓN A SU NATURALEZA JURÍDICA, AL NO EXISTIR CONTROVERSIAS ENTRE PARTES.” y exponen lo que consideran es doctrinalmente, la naturaleza de la jurisdicción voluntaria.

Reiteran que no se aprecia que sea absolutamente inviable lo solicitado por los promoventes, pues acudieron ante la autoridad jurisdiccional bajo el entendido de que no había alguna cuestión litigiosa o de controversia entre ellos, según lo regulado en el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México.

Consideran que debió tomarse en cuenta la decisión asumida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 553/2018.

n en s
con lo d

indicando
distrito c
untaria

l que s
teresado

nterior, e
go de P
ra Ciuda
ndencia
dispone

[illegible]

ra Ciudad
dencia
dispone

a juriso
en que
interesa
que este



determinadas. - - - A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros.”

De la referida disposición se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

De esta manera, para la procedencia de este procedimiento es indispensable que **no se pida al órgano jurisdiccional que adopte alguna posición o postura respecto de una pretensión o tenga una conducta en particular**, ya que el objeto de la jurisdicción voluntaria se limita a una solicitud de parte interesada, con el fin de que el juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que previamente exista o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, ya que la característica esencial de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre

una sol
de si se
raciones
on.
tesis I.3
Civil de
en el Se
mo XXX
, Mater
OLUNTA

Civil de
en el Se
mo XXX
, Mater
OLUNTA
puesto c
establec
e Proce
parte i
ervenga
tada, co

establecimiento de un procedimiento de control de calidad, para la parte interna de la empresa, que permita la supervisión y el control de la calidad, sin necesidad de recurrir a la certificación externa para demostrar la calidad.



características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Por tanto, el escrito de jurisdicción voluntaria no constituye una propuesta de demanda para la decisión de si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas obligaciones o si es indebida la causa por la cual se incumplieron, pero son aspectos que pueden ser narrados por el solicitante como causa de pedir la intervención judicial para que se haga saber a la contraparte su interés en que cumpla, lo cual no desborda el supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria.”

De igual forma es aplicable en lo conducente la tesis I.8o.C.263 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que también se comparte, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 1975, Novena Época, Materia Civil, con registro digital 180132, que establece:

“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. NO ES UN MEDIO EFICAZ PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS. *Las diligencias de jurisdicción voluntaria sólo son parte de un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, tal como lo establece el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por tanto, como no constituyen o declaran derechos o imponen una condena como un procedimiento contradictorio, no son los medios idóneos para modificar las obligaciones pactadas en un contrato, pues para que tengan verificativo, se requiere el consentimiento expreso de las partes que contrataron a través de un convenio en el que expresamente plasmen su voluntad de modificar las cláusulas del contrato.”*

Derivado de lo anterior como acertadamente lo consideró el juez de distrito, lo pretendido por los recurrentes no puede ser jurídicamente tramitado como



jurisdicción voluntaria, ello en razón de que su petición no se ajusta al contenido del artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en mención, ya que del mismo se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende aquellos actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

En el caso en estudio, el acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la sentencia de la sala que confirmó el desechamiento de la jurisdicción voluntaria en la que los recurrentes pretendieron que el juez de origen tuviera conocimiento paso a paso del estado de gestación previsto en el contrato de maternidad sustituta de doce de julio de dos mil veintiuno, celebrado entre los recurrentes, y que al nacer el menor producto de la gestación, se ordenara al Registro Civil que expidiera el acta de nacimiento correspondiente, con los nombres de *****

***** y *****

padres; petición que no cumple con el objeto de las diligencias de jurisdicción voluntaria.

En efecto, a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria no es posible ordenar al Registro Civil que levante un acta de nacimiento, porque se estaría constituyendo una situación jurídica familiar que no es propia de esa vía, ya que el juez familiar estaría adoptando una posición o postura frente a la pretensión concreta de los recurrentes, lo que no es acorde a su objeto, el cual se limita a dar certeza jurídica de un acto, a solicitud de parte, pero sin constituir un derecho, como lo es el reconocimiento del estado civil ante la orden de expedir un acta de nacimiento.

Aunado a ello, no existe disposición legal alguna que faculte al juez a ordenar que el Registro Civil extienda un acta de nacimiento, sólo frente a la solicitud de un particular, y menos aún, a través de la vía de jurisdicción voluntaria.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tampoco existe sustento para considerar que la resolución que emita el juez en esa vía, constituya una sentencia ejecutoriada que defina el estado civil de una persona, específicamente el nacimiento, sólo ante la solicitud de parte interesada, como lo suponen los recurrentes, precisamente porque dicho procedimiento sólo tiene por objeto la intervención del juez para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que pueda adoptar alguna posición o postura respecto de una pretensión.

En cambio los artículos 54 y 55 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como el 46 del Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México, disponen respectivamente lo siguiente:

“Artículo 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el

formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. - - En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los términos en que lo establezca el Reglamento del Registro Civil. - - - Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos.”

“Artículo 55.- *Tienen obligación de declarar el nacimiento ante el Juez del Registro Civil de su elección, el padre y la madre o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado dentro de los*



seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió
aqué. - - - En caso de registro extemporáneo de
nacimiento, deberá estarse a lo que disponga el
Reglamento del Registro Civil. - - - Para el registro de
nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto
en el Reglamento del Registro Civil.”

“Artículo 46.- Para la autorización de las actas relativas al registro de nacimientos que se realicen dentro de los seis meses siguientes al alumbramiento, los interesados deberán presentar: - -

- I. Solicitud de registro debidamente requisitada; - - -**
- II. El menor a registrar, por conducto de su padre y madre, o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos y demás ascendientes en línea recta, los hermanos o los tíos; - - -**
- III. Certificado de Nacimiento en el formato que al efecto expida la Secretaría de Salud del Distrito Federal de conformidad con este reglamento, que contenga nombre completo de la madre; huella plantar del recién nacido, sexo del menor, así como huella digital del pulgar y firma de la madre; fecha y hora del**

nacimiento; domicilio en que ocurrió y sello de la Institución pública, privada o social del Sector Salud; nombre y firma del médico, así como, número de cédula profesional de éste. - - - En todos los casos en que se presente el certificado de nacimiento, éste hará prueba plena del día, hora y lugar en que ocurrió el nacimiento, del sexo del recién nacido y de la identidad de su madre. - - - Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos solicitados en el Código y demás normas aplicables. - - - Para los efectos del artículo 75 del Código Civil, se exceptúa la obligación de estampar la huella digital en el acta de nacimiento del menor fallecido.- - - En su caso, Constancia de Parto que contenga el nombre y firma del médico cirujano o partera debidamente registrada ante la Secretaría de Salud, que haya asistido el alumbramiento; lugar, fecha y hora de nacimiento; y nombre completo de la madre; - - - Cuando no exista el certificado o la constancia antes señalada, o por causas de fuerza mayor no se tuvieran, el declarante deberá presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos realizada ante la Procuraduría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de documentos y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente. - - - Si al momento de realizar el registro de Nacimiento, se acredita con copias certificadas de actas del estado civil, que algún dato contenido en el certificado de nacimiento en los casos de omisión de algún nombre, ortografía en el nombre y apellidos así como edad de la madre se procederá a asentar el dato correcto en el acta correspondiente, conforme la documentación que se acompañe, la cual se integrará al expediente respectivo. - - - IV. Copia certificada del Acta de Matrimonio de los padres; en caso de no ser casados, deberán presentar sus Actas de Nacimiento para el efecto de que se haga constar la filiación de ambos en el acta del registrado; - - - V. Identificación oficial de los presentantes; - - - VI. (DEROGADA, G.O. 11 DE MARZO DE 2004) - - - VII. Comprobante del domicilio declarado por él o los presentantes del menor a registrar. - - - La filiación en el caso de hijos nacidos dentro de matrimonio o concubinato del

trito Fec
tenida e
el caso
opción
orme lo
ante l
los apel
”
ñalados
sto para
ente an
ciones d
uez del
nde aq
de n
e declar
iera de
vas.

De los preceptos señalados debe destacarse que existe un procedimiento previsto para la expedición de un acta de nacimiento, directamente ante el Registro Civil, quien debe emitir las declaraciones de nacimiento cuando se presente al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. Además, quienes tienen la obligación de declarar el nacimiento es el padre y la madre o cualquiera de ellos, ello para la autorización de las actas relativas.



En el caso, como se ha precisado, *****

***** ***** * ***** ***** *****

suscribieron con ***** ***** ***** ***** , el 12 (doce)

de julio de 2021 (dos mil veintiuno), el contrato de maternidad sustituta, en el que esencialmente, los primeros externaron su voluntad procreacional. De ahí que, como lo indicó el juez de distrito, cuentan con la facultad de realizar el citado trámite ante la autoridad registral, en términos de los preceptos indicados, pero no, mediante la promoción de la jurisdicción voluntaria, pues como se ha explicado, su objeto no es constituir un derecho relacionado con el nacimiento ni la resolución que ahí se dicte constituye una sentencia ejecutoriada que verse sobre ese hecho.

De ahí que, haya sido correcto lo sostenido por el juez de distrito respecto a que el juez primigenio no está facultado para ordenar la expedición del acta de nacimiento y que los quejosos tenían expedito su derecho para acudir ante el Juez del Registro Civil a solicitar la expedición del acta de nacimiento, y en el caso de que se negara la misma, tienen la facultad de hacer valer los medios de defensa que estimen pertinentes para impugnarlo. Además,

que no sería necesaria la exhibición de una sentencia ejecutoria que le autorice al Juez del Registro Civil de esta ciudad realizar el registro del menor con la filiación de los padres contratantes, pues este tiene la obligación de establecerla, siempre y cuando se exhiban las constancias pertinentes que permitan demostrar que fue engendrado por medio de la técnica de reproducción asistida, denominada de maternidad subrogada.

No obsta a lo anterior que los recurrentes indiquen que usando el mismo criterio del juzgador de distrito, se llegaría a la conclusión de que, tampoco se podría ordenar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento en un procedimiento de jurisdicción voluntaria de adopción.

Ello es así, porque el acto reclamado en el amparo que ahora se revisa, no deriva de un procedimiento de adopción, y además, éste sí encuentra regulación en los artículos 923 a 925, contenidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo IV, del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y se prevé expresamente en el artículo

Por otra parte, sostienen los recurrentes que el juez de distrito también omitió considerar la finalidad de solicitar la intervención de un juez familiar del proceso oral de esta Ciudad para lograr el registro de nacimiento del menor hijo de ***** * *****

*****. Es decir, también pasó por alto que, a pesar de que los promoventes cuentan con las técnicas médicas para la gestación sustituta; a pesar de que se puedan pactar las condiciones con la gestante; a pesar de que se cuente con una clínica especializada en la reproducción asistida; porque a pesar de que cuenten con un contrato entre las partes ratificado, incluso ante notario público; y aunque se llegue a término la gestación y el producto de la misma sea un niño/a vivo, viable y sano, todo lo anterior resulta insuficiente para obtener la filiación jurídica, ya que al darse el alumbramiento en la clínica u hospital que sea, el certificado de nacimiento (formato de la Secretaría de Salud) que firma el médico que recibe al o la menor, SIEMPRE SERÁ EXPEDIDO a nombre de quien dio a luz o tuvo el alumbramiento, por lo que resulta IMPOSIBLE JURÍDICAMENTE que dicho certificado se expida a nombre de *****



***** , a menos de que haya un acto de corrupción y so pena de las sanciones aplicables. En ningún caso se expedirá a nombre de ninguna otra mujer y ni siquiera del padre.

Manifiestan que promovieron las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con la finalidad poder exhibir las pruebas de la ejecución del contenido obligacional, tales como exámenes médicos, éxito de la transferencia e implantación embrionaria, de los pagos para cubrir los gastos de análisis clínicos, de atención médica, de medicamentos, de gastos hospitalarios, informes médicos que acrediten la salud física y mental de la gestante y del producto embrionario durante el embarazo, etcétera, a fin de que tuviera conocimiento, paso a paso del estado que guardan la gestación.

Exponen que en cuanto a que *"a través del procedimiento instado el juzgador no puede verificar el cumplimiento del contrato de maternidad sustituta"* se manifiesta que lo que se pretende es que ante la autoridad responsable Juez Quinto de Proceso Oral Familiar se

oficio al Registro Civil indicando que el ACTA de nacimiento sea expedida con los nombres de los padres biológicos.

Invocan la tesis “**DESECHAMIENTO DE DEMANDAS CIVILES INVIABLES. SUPUESTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 72 y 257 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.**” e indican que conforme a dicho criterio, el desechamiento de una demanda civil es algo muy excepcional, pues sólo podría justificarse ante la



evidencia irremovable o insuperable de algún presupuesto procesal o de alguna condición para el dictado de la sentencia de fondo, o bien, por la absoluta inviabilidad de lo pretendido; cuestiones que no quedaron de plano evidenciadas en las consideraciones que sustentaron el desechamiento del escrito inicial de las diligencias de jurisdicción voluntaria, y mucho menos en la resolución que confirmó el desechamiento. Lo anterior, pues al promoverse las diligencias únicamente se exhibió lo que hasta ese momento se tenía celebrado entre las partes, que fue el contrato de maternidad subrogada, y si bien se trataba de un hecho futuro, el mismo era INMINENTE, tal es así que el día de hoy ya existe un menor de edad DESPRENDIDO de la gestante VIVO y VIABLE, motivo por el cual no fue razón suficiente para desechar que se considerara un hecho futuro, ya que, de la misma manera, también había posibilidades de que se logaran esas circunstancias, tal y como sucedió.

Afirman que se les negó toda posibilidad de ser ESCUCHADOS, de ofrecer pruebas o constancias de lo que fuera sucediendo en el tiempo posterior durante la

ejecución del contrato, como la relativa a si tuvo éxito el embarazo, y parece irrisorio que la propia autoridad pretenda que se haga una simulación de hechos, pues es mediante la jurisdicción voluntaria que los recurrentes de manera INFORMADA, VOLUNTARIA Y LIBRE, sin que exista conflicto allegaron elementos a la autoridad para el RECONOCIMIENTO de sus derechos.

Sostienen que se debió considerar la existencia del menor de edad que se estaba gestando mientras se interpuso el juicio de amparo, por lo que, fue y es posible conceder el amparo y protección de la justicia federal con efectos restitutorios e, incluso, anticipatorios, conforme a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que la negativa de mérito puede implicar una violación a esos derechos, como lo son el derecho a la identidad, al nombre, a la salud, garantizados por el artículo 4o. de la Constitución General, los cuales por mandato constitucional y jurisprudencial deben ser protegidos y respetados por las autoridades responsables, por lo que con la concesión del amparo se estarían logrando dichos efectos restitutorios e incluso, anticipatorios.

Además, los propios recurrentes indicaron que su pretensión de que se constatará el cumplimiento de las obligaciones de las partes durante el periodo de gestación, era para sustentar fácticamente el vínculo filiatorio, con el objeto de que, al verificarse el nacimiento, se ordenara al Registro Civil expedir el acta de nacimiento correspondiente; sin embargo, como se ha explicado, la jurisdicción voluntaria no es la vía para la consecución de ese fin, acorde a las consideraciones que han sido expuestas.

De ahí lo inatendible de los agravios en estudio, puesto que a nada práctico conduciría efectuar una análisis de fondo sobre los temas planteados, por constituir hechos que, aun y cuando se solicitó se certificaran en las diligencias de jurisdicción voluntaria, han culminado, como son las obligaciones que se fueron cumpliendo sucesivamente por las partes durante el periodo de gestación, y además, porque la finalidad pretendida que consistió en la pretensión de que el juez de origen ordenara la expedición de la correspondiente acta de nacimiento, ya ha sido analizada.



Así ante lo inatendible de los argumentos expresados en los agravios, resulta innecesario pronunciarse respecto a lo aplicable o no de las tesis que la parte recurrente invoca en dichos motivos de inconformidad.

Se cita en apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, visible en la página 3552, del siguiente rubro y texto:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: **'TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO'**, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o



son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que

se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo.”

En otro orden de ideas, los recurrentes aducen que se tiene un alto grado de probabilidad de que se les haya afectado el derecho de acceso a la justicia.

Estiman que la autoridad judicial debió dar oportunidad de escuchar a los quejosos antes de emitir alguna resolución sobre las diligencias. Sin embargo, no lo hizo así, y paralelamente, tuvo lugar el embarazo de la promovente; dejando en estado de indefensión al menor de edad, al violentar sus derechos, principalmente los de filiación e identidad, así como su interés superior.



Consideran que es contrario al derecho de acceso a la justicia que, se hayan desechado las diligencias de jurisdicción voluntaria bajo consideraciones que correspondería, en su caso, al estudio de la resolución con que culminan las diligencias de jurisdicción voluntaria.

Refieren que al menor hijo recién nacido se le está privando del derecho de identidad, acceso a la salud, a conocer de su filiación, así como todos y cada uno de los derechos que de ello deriven, de nacionalidad, derecho de conocer su origen, de contar con la clave única de registro poblacional, entre otros.

Apuntan que el máximo Tribunal ha reconocido el derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual incluye acceder a la procreación y crianza de hijos propios, adoptados gestados mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, teniendo en cuenta que se debe respetar en todo momento el interés superior del menor.

También ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la

Nación que el derecho de los menores a la identidad y la protección a su interés superior, exigen determinar la filiación que les corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de está, como los alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo.

Invocan el contenido del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exponen lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho a la identidad, citando la tesis 1ª.CXVI/2011 con el rubro “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.**”

Precisan que resulta patente que, la sociedad está interesada en que los derechos de la niñez sean protegidos por el Estado, salvaguardando su INTERÉS SUPERIOR.

Los anteriores agravios resultan **infundados.**



Ello es así, puesto que no se estima que se encuentre vulnerado el derecho de acceso a la justicia, pues el artículo 17 Constitucional, en su segundo párrafo, establece que el derecho de acceso a la impartición de justicia, también parte de la observancia que se le dé a los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas.

Por lo tanto, el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista Constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad.

Por ello, el artículo 17 Constitucional prevé la tutela judicial efectiva, a fin de que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los individuos el acceso a la justicia, garantía que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un procedimiento y de promover la actividad jurisdiccional, una vez cumplidos los respectivos requisitos

procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y que éstas sean cumplidas en su totalidad.

Así, dicho derecho no se encuentra vulnerado conforme a lo anteriormente plasmado, dado que resultó correcta la determinación de la autoridad recurrida, al considerar que la vía mediante la cual se pretendía solicitar que el juez de origen ordenara al Registro Civil la expedición del acta de nacimiento del menor, no era la indicada, puesto que la tramitación de jurisdicción voluntaria no es el medio previsto para ello, puesto que su finalidad, consiste en dar fe o certeza de uno o varios actos y no constituir algún derecho o reconocer una situación relacionada con el estado civil.

De igual forma, contrario a lo afirmado por los recurrentes no se advierte que se trasgredan los derechos de filiación (y los que derivan de éste como nacionalidad, conocer su origen, de contar con la clave única de registro poblacional, entre otros), identidad, interés superior, acceso a la salud, protección del desarrollo y organización de la



familia, procreación y crianza de hijos, alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo.

Elo es así porque el hecho de que la vía de jurisdicción voluntaria no sea la apta para solicitar la expedición de un acta de nacimiento, no hace nugatorios esos derechos, habida cuenta que como se explicó, es obligación de los padres acudir ante el Registro Civil a efectuar esa solicitud y no existe dispositivo legal que faculte a realizar esa gestión por medio de la vía planteada por los recurrentes. Además no se advierte determinación alguna tendiente a restringir esos derechos, y los recurrentes sólo hacen depender la trasgresión a la que aluden de que las diligencias de jurisdicción voluntaria no les fueron admitidas, lo cual, se reitera, fue acertado.

Consecuentemente, resultó correcto lo señalado por el juez de distrito respecto a que la inadmisión de dichas diligencias no implica **una restricción a la tutela judicial efectiva**, porque si bien el artículo 17 constitucional prevé que los órganos del Estado se abstengan de

obstaculizar a las personas el acceso a la justicia, que consiste en que todos los gobernados tengan la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Además, que los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refieren que toda persona debe de ser oída con las debidas garantías, sin embargo, ello no es obstáculo para que se respeten los procedimientos establecidos en la legislación común, como acontecía en el caso, en el que se había constatado que la vía planteada por los quejosos no es la idónea para los fines que persiguen. Asimismo, que a nada práctico conduciría dar trámite a la solicitud, si tales medios no pueden surtir efectos contra terceros, ni con ello podría girarse oficio al Registro Civil para que expidiera acta de nacimiento con el nombre de los padres contratantes.

Por lo tanto, al resultar **infundados e inatendibles** los motivos de agravio y como este tribunal colegiado no advierte que tal deficiencia deba suplirse de



oficio en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede **confirmar** la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo; se resuelve:

PRIMERO. Se **confirma** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni

protege a *****

***** * ***** ***** ***** *****, en contra de los

actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y por los motivos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito por unanimidad de votos
de los Magistrados, **ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES**,
Presidente, **CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI**,
y **FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ**, siendo
ponente el segundo de los nombrados, quienes firman
electrónicamente ante el Secretario de Tribunal **ALBERTO
MENDOZA MACÍAS**, que da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES

MAGISTRADO

**CARLOS MANUEL
PADILLA PÉREZ VERTTI**

MAGISTRADA

**FORTUNATA FLORENTINA
SILVA VÁSQUEZ**

SECRETARIO DE TRIBUNAL

ALBERTO MENDOZA MACÍAS

Alberto Mendoza Macías
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.24
18/01/24 14:58:45



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
39451496_0054000030287918007.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	Alberto Mendoza Macias	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.24	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/12/22 17:13:26 - 02/12/22 11:13:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	32 40 73 ff bb 2e e8 78 17 7b a7 af a1 ef 18 c8 b7 53 54 37 c9 d3 9f 89 f4 71 79 b1 4c b6 00 29 56 0e 78 2e 1d f0 49 55 7a b1 fc b4 dd 2f 69 c6 c3 82 8c 3b 7e e0 a2 bb 33 18 a2 65 c8 89 10 66 63 3d a1 ef 7f dd dc 7d de a4 35 80 50 d9 22 f1 5c ad 9e 47 80 22 46 7b dc 38 ab 47 38 88 73 34 20 ee 21 53 1d 5a 41 83 6a c4 4c 8e 3e 15 52 6f 2d b2 c3 04 c9 fa 79 d4 31 51 a8 da 1d ff ac 3a 12 c5 2c ed 13 65 f6 79 a9 04 af 9c cf 46 1f f2 00 27 31 e9 2d 12 64 c6 56 aa 62 d4 d1 57 2a e4 42 43 2b 56 7c 81 df 80 41 fd 35 24 6b 18 5d 4b 24 80 d2 4a 9d 46 6b 11 4f ed ab b9 35 1a 1d e2 25 94 36 86 40 e0 eb 8c 3a 14 e8 94 9a 7a cd 4c 47 93 69 42 4a 19 b3 26 59 a4 71 4a 4d af 8a 4d 58 17 df 35 5b 72 2b 0e 05 e3 f0 23 cf e8 b4 29 99 ff 0b 2b b1 8f b7 74 6a 43 74 98 e5 34 c5 d3			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	02/12/22 17:13:26 - 02/12/22 11:13:26			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	02/12/22 17:13:26 - 02/12/22 11:13:26			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	20853768			
Datos estampillados:	kQHvNISLVqijRWKD/6UNhhEpGdM=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CARLOS MANUEL PADILLA PEREZ VERTTI	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9b.3e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/12/22 21:15:34 - 02/12/22 15:15:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	8e 59 16 03 27 a7 46 c4 2a a4 e7 63 cc 92 34 9f 90 be bf d9 4a 87 1d ab 05 02 3f 2f 50 fd c4 63 44 e9 b7 51 73 9f 5f f9 40 15 22 c0 f7 17 52 44 6b 4c bb 58 8d 66 a1 b7 b8 3e 2d e2 92 8a 8f 4f 38 c0 9d 2a ab 6d f3 f2 fe 3b bc 54 4b 92 f0 48 8f 8a e2 a3 4e de 75 4d 26 b0 48 7c 49 77 4f 5e 97 fc 37 52 4f 36 47 2a eb 47 ff 90 f1 28 c1 79 60 51 44 c4 4e 6c c2 c5 52 6e 2e d8 7e bc 85 46 5c 70 24 9d 75 a8 7d 9b 63 6e be 28 49 9d c9 4d ee 76 a8 57 89 cc 31 7d 1a f2 08 aa fd b1 db 75 32 5b 2c 21 7c 7d 30 94 0e c0 e0 28 4a 2d 9d 0f dd 67 1f 0b 52 22 a9 08 b1 c4 6b 81 a7 22 2e 37 07 32 4b 41 eb 3a c4 e4 09 a9 17 72 14 d3 a6 79 86 be 45 f8 f1 c6 f1 8e fb 99 17 c2 86 57 33 0b e9 26 0e 9a 4d c5 e2 0f 93 eb 2d 64 9d 23 9f 83 b4 32 46 4f de dd ae 90 ed ae f7 0c 1a f0 96 5e			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	02/12/22 21:15:34 - 02/12/22 15:15:34			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	02/12/22 21:15:35 - 02/12/22 15:15:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	21037637			
Datos estampillados:	pSJdidYl/SaMJfoWyGcoY3Qfik=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ISMAEL HERNANDEZ FLORES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.18.f4	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/12/22 20:39:22 - 05/12/22 14:39:22	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	91 0d df df 2c 41 2e f3 70 f3 b3 99 79 58 47 c7 05 a4 9e e7 3b 39 c7 57 8c ba d4 55 4f e2 a5 40 42 c5 1b 50 85 1a 9a 90 f5 bd 5d 6f 88 17 29 4a c2 b0 a9 f5 b1 c3 a4 c9 d5 8e 0a 50 a7 09 52 c3 83 b4 a6 ae 1c 73 7d ad f0 88 ab a4 88 41 40 61 93 98 62 88 47 82 04 0b 72 67 3e 8e 98 0e d3 ba e7 77 8b f2 c7 24 b5 8d 88 ec 29 c9 5f b6 0c 0b 35 72 9d 6d 9a 9c 5d 14 f3 15 fb 74 26 92 0a 2c 0d 4f 8f 49 28 c2 99 e7 2f 60 64 96 fa f2 b6 44 1e ca 53 cb 87 f9 22 8b 4f 6a b3 a4 40 ec ac 5f a4 69 95 8c 2a 29 e4 82 76 ec 0e 22 ee 30 f4 c3 7a 85 7e 43 3e 1f f4 8a 0b e0 fd 46 01 9b 3b 55 ff 9b ea 69 eb 59 ac b3 db c3 c0 09 3e 0f 80 cb ff 19 a1 77 6e 87 93 56 fa fa 64 87 60 ee 34 27 72 e4 41 3e d1 28 9f fa 3e 3a b0 63 c7 50 c0 63 3c 44 70 27 19 e0 87 bf 7d cc 8a c7 fe 8f 98 55			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	05/12/22 20:39:22 - 05/12/22 14:39:22			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	05/12/22 20:39:23 - 05/12/22 14:39:23			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	21467708			
Datos estampillados:	nyqJN8xvDUyeGk/LVBYvtd5XEAU=			



FIRMANTE					
Nombre:	FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1f.d6		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	05/12/22 20:56:28 - 05/12/22 14:56:28		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	1b 56 da ad 7c 58 09 98 94 47 a3 e5 bd 45 09 1c f8 b0 60 a2 b7 fc 27 b3 55 a2 3a bc 5f 06 81 b8 73 65 8f dd 71 69 70 fc 89 36 44 d1 c2 44 6a fd 2e c5 ec 6f be d8 5d 2b 02 2b 83 16 f8 af 53 86 4d 34 c4 84 a7 21 c4 8b ce 89 a7 fd 2a 39 ad b8 26 d3 ff 56 a5 35 00 63 87 ea 11 fd d1 50 01 9b 31 75 b4 60 c2 06 07 ab 0f dd 53 ab e2 6a c6 16 36 de e9 c2 55 b0 04 87 08 f0 cb fd 83 f1 7c 65 e9 b1 29 27 11 ef 08 16 11 74 0e 26 30 4a 6e 60 7c ed cc 84 ca f2 cc 51 bf e0 88 d7 ac b8 cb 57 53 d1 20 73 27 cd 49 d0 6b 06 45 53 1f 41 8b 33 64 60 30 48 4f aa c1 56 17 a3 38 08 12 87 12 5a bc dc 10 4f 7e 94 76 a7 fe 52 2d 73 eb 8f a8 60 a4 d8 a2 56 bf ad 66 ec fc 2a 62 f3 d8 43 bb 6a d9 d8 66 48 bf 41 50 ff 29 69 36 99 85 da e9 c7 cf 28 74 31 da 3f 93 0b bb d4 46 45 28 dd c7 d2				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	05/12/22 20:56:28 - 05/12/22 14:56:28				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	05/12/22 20:56:29 - 05/12/22 14:56:29				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	21482215				
Datos estampillados:	aRrVwP5Mhl9/0A/khrr5gWFMwMk=				

El treinta de noviembre de dos mil veintidos, el licenciado Alberto Mendoza Macias, Secretario(a), con adscripción en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales. Conste.